

60
59

AMPARO EN REVISION No. 928/94
QUEJOSO: COMERKIM, S.A. DE C.V.

MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA
SECRETARIO: FRANCISCO DE JESUS ARREOLA CHAVEZ



DE JUSTICIA
ACION
DE ACUERDO

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente
al día veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y cinco.

VISTOS Y,

RESULTANDO:

PRIMERO.- Por escrito presentado el veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y cuatro en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Edmundo Hernández Mayén en representación de Comerkim, sociedad anónima de capital variable, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

"AUTORIDADES RESPONSABLES.- 1) El H. Congreso de la Unión. - 2) El C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. - 3) El C. Secretario de Gobernación. - 4) El C. Secretario de Hacienda y Crédito Público. - 5) La C. Administradora Local de Auditoría Fiscal del Centro del Distrito Federal de la Administración Local del Centro del Distrito Federal dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. - 6) El C. Administrador Local de Recaudación del Centro del Distrito Federal de la Administración Local del Centro del Distrito Federal dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. -

"- - Todas las anteriores autoridades señaladas como
"responsables pueden ser notificadas en sus domicilios
"oficiales en la ciudad de México, Distrito Federal, de acuerdo
"con lo dispuesto por el artículo 305 del Código Federal de
"Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria."

"ACTOS RECLAMADOS. - - - a) Del H. Congreso de la
"Unión, se reclaman la discusión, aprobación y expedición de la
"Ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas
"disposiciones fiscales y que reforma otras leyes federales de
"fecha 17 de diciembre de 1990, publicada en el Diario Oficial
"de la Federación del día 26 de diciembre de 1990, muy
"especialmente en relación con la reforma que sufre el artículo
"84, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, en vigor
"a partir del 1o. de enero de 1991. - - - b) Del C. Presidente
"de los Estados Unidos Mexicanos, se reclaman la promulgación,
"publicación y ejecución de la Ley que establece, reforma,
"adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales y que
"reforma otras leyes federales de fecha 17 de diciembre de
"1990, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día
"26 de diciembre de 1990, muy especialmente en relación con la
"reforma que sufre el artículo 84, fracción VI, del Código
"Fiscal de la Federación, en vigor a partir del 1o. de enero de
"1991. - - - c) Del C. Secretario de Gobernación, se reclama el
"refrendo de la Ley que establece, reforma, adiciona y deroga
"diversas disposiciones fiscales y que reforma otras leyes
"federales de fecha 17 de diciembre de 1990, publicada en el
"Diario Oficial de la Federación del día 26 de diciembre de
"1990. - - - d) Del C. Secretario de Hacienda y Crédito
"Público, se reclaman todos los actos, acuerdos u órdenes
"tendientes a la ejecución de la Ley que establece, reforma,
"adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales y que
"reforma otras leyes federales de fecha 17 de diciembre de
"1990, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día



DE 1 / N



6 de diciembre de 1990. muy especialmente de los que tiendan
 "a la aplicación del artículo 84. fracción VI, del Código
 "Fiscal de la Federación. que entró en vigor a partir del 10.
 "de enero de 1991. - - - e) De la C. Administradora Local de
 "Auditoría Fiscal del Centro del Distrito Federal de la
 "Administración Local del Centro del Distrito Federal
 "dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se
 "reclama el oficio número 102-A-11-III-57168 de fecha 30 de
 "noviembre de 1993, donde impone una multa a mi poderdante en
 "cantidad de N\$778,692.75 de conformidad con lo establecido por
 "el artículo 84, fracción VI, del Código Fiscal de la
 "Federación, en vigor a partir del 10. de enero de 1991. - - -
 "f) Del C. Administrador Local de Recaudación del Centro del
 "Distrito Federal de la Administración Local del Centro del
 "Distrito Federal dependiente de la Secretaría de Hacienda y
 "Crédito Público, se reclama todos los actos tendientes a
 "obtener el pago de la multa que se impuso a mi representada en
 "cantidad de N\$778,692.75, en el oficio número 102-A-11-III-
 "57168 de fecha 30 de noviembre de 1993, de conformidad con lo
 "establecido en el artículo 84. fracción VI, del Código Fiscal
 "de la Federación, en vigor a partir del 10. de enero de 1991".

JUSTICIA
 CION
 DE ACUERDO

SEGUNDO.- La parte quejosa señaló como preceptos
 constitucionales violados en su perjuicio los artículos 16 y 22
 de la Constitución General de la República, y como antecedentes
 del caso narró los que en seguida se transcriben:

"1.- Mi representada, con registro federal de
 "contribuyentes número [REDACTED], es una persona moral
 "constituida de acuerdo con las leyes mexicanas, cuyo principal
 "objeto social es la compra, venta, importación, exportación y
 "comercialización de artículos de cuero, piel y materiales
 "sucedáneos. - - - 2.- Mediante oficio número 102-A-11-III-
 "55694 de fecha 26 de noviembre de 1993, emitido por la C.

"Administradora Local de Auditoría Fiscal del Centro del
"Distrito Federal de la Administración Local del Centro del
"Distrito Federal, ordenó a los señores René González
"Villagómez, Georgina Miguel Vázquez, Marcos Labrada González y
"Jorge Angel Uscanga Pérez, que practicaran una inspección a mi
"representada para verificar que los comprobantes fiscales que
"expide reúnen los requisitos fiscales. - - - 3.- El día 26 de
"noviembre de 1993, los señores René González Villagómez, Jorge
"Angel Uscanga Pérez y Georgina Miguel Vázquez, realizaron la
"inspección ordenada en el oficio que menciono en el párrafo
"precedente, observando que las facturas de mi mandante números
"A 4829 a A 4833, A 4836, A 4837, A 4840 a A 4842, A 4844, A
"4846 a A 4858, B 0541 y B 0542 todas ellas de 26 de noviembre
"de 1993, y C 01062 a C 01072 y C 01074 a C 01087 éstas otras
"de 24 de noviembre de 1993, no consignan el número y fecha del
"documento aduanero, así como la aduana por la que se realizó
"la importación, y en algunas de dichas facturas no se consigna
"la clave de registro federal de contribuyentes ni se conserva
"copia fotostática de la cédula de la clave del registro
"federal de contribuyentes, hechos que hicieron constar en el
"acta de visita contenida a fojas 4699396 a 4699398. - - - 4.-
"Como consecuencia de lo anterior, el día 28 de enero de 1994,
"se notificó personalmente a mi mandante el oficio número 102-
"A-11-III-57168 de 30 de noviembre de 1993, emitido por la C.
"Administradora Local de Auditoría Fiscal del Centro del
"Distrito Federal de la Administración Local del Centro del
"Distrito Federal, donde le impone una multa en cantidad de
"N\$778,692.75, por expedir comprobantes fiscales sin que reúnan
"los requisitos fiscales, de conformidad con lo dispuesto por
"el artículo 84, fracción VI, del Código Fiscal de la
"Federación vigente."

Asimismo, la parte quejosa expresó el siguiente
concepto de violación:



"Unico.- El artículo 84. fracción VI, del Código Fiscal de la Federación vigente, pugna abiertamente con el artículo 22 constitucional, debido a que prevé la imposición de una multa excesiva por la infracción relativa a expedir comprobantes sin requisitos fiscales. - - - Establece el artículo 83. fracción VII, del Código Fiscal de la Federación vigente, que se considera infracción relacionada con la obligación de llevar contabilidad, siempre que sea descubierta en el ejercicio de facultades de comprobación, expedir comprobantes sin requisitos fiscales. - - - Ahora bien, el artículo 84. fracción VI, del propio ordenamiento, prevé que a quien cometa dicha infracción se le impondrá un multa de cinco veces el importe total que debió consignarse en el comprobante fiscal. - - - Precisamente con apego en dichas disposiciones, la C. Administradora Local de Auditoría Fiscal del Centro del Distrito Federal de la Administración Local del Centro del Distrito Federal, emite su oficio número 102-A-11-III-57168 de fecha 30 de noviembre de 1993, donde impone a mi representada una multa en cantidad de \$778,692.75, por haber emitido comprobantes sin requisitos fiscales, equivalente a cinco veces el importe total de las operaciones. - - - En efecto, la autoridad fiscal impone la multa como consecuencia de que al practicar una inspección a los comprobantes fiscales de mi representada encontró que éstos no mencionan los datos relativos al número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la que se realizó la importación, ni se menciona en algunos de dichos comprobantes la clave del registro federal de contribuyentes y tampoco conserva la copia fotostática de la cédula de la clave del registro federal de contribuyentes. - - - Sin embargo, independientemente de que mi representada haya incurrido en la infracción de emitir comprobantes sin requisitos fiscales, ello no justifica que por la omisión de esa obligación formal proceda imponerle una

"multa excesiva como la que establece el artículo 84, fracción
"VI, del Código Fiscal de la Federación, precisamente porque el
"artículo 22 de nuestra Carta Magna prohíbe la imposición de
"sanciones o multas excesivas. - - - Al respecto establece el
"artículo 22 constitucional, de manera expresa, que ^{que} ~~que~~
"prohibida la imposición de multas excesivas. Aun cuando el
"texto constitucional no ha señalado qué se debe entender por
"una multa excesiva, la doctrina y la jurisprudencia han
"establecido que se considerará como tal aquella ^{sanción} ~~sanción~~
"pecuniaria que rebase el límite de lo ordinario o razonable, o
"que se fije en desproporción con la gravedad del ilícito con
"el monto del negocio y con la capacidad económica del multado.
"- - - De tal manera, que no será excesiva aquella multa que la
"autoridad fiscal imponga con pleno arbitrio, considerando la
"gravedad del ilícito, el monto del negocio y las condiciones
"del infractor. - - - Tomando en cuenta lo manifestado, se
"puede concluir que el artículo 84, fracción VI, del Código
"Fiscal de la Federación, que faculta a la autoridad fiscal
"para imponer multas a aquellas personas que emitan
"comprobantes sin requisitos fiscales, es una disposición que
"contraviene el artículo 22 constitucional, ya que de su
"contenido se desprende que la autoridad fiscal no puede
"imponer una multa al infractor acorde con los extremos
"mencionados, para que se pueda considerar que no es excesiva.
"- - - Lo apuntado es así, si se tiene presente que conforme al
"artículo 84, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación,
"en todos los casos sin distinción alguna se impondrá una multa
"de cinco veces el importe total que debió consignarse en el
"comprobante fiscal respectivo. - - - En el caso del artículo
"84, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, se debe
"reconocer dicha inconstitucionalidad máxime cuando lo que se
"busca con la imposición de la multa es tan solo reprimir la
"conducta infractora del contribuyente, para evitar que



BB

17

DE JUSTICIA
NACIONAL
DE ACUERDO

continúe dejando de observar las disposiciones fiscales, y en
"el futuro las observe en los exactos términos previstos por la
"ley. - - - Un criterio semejante y exactamente aplicable al
"caso es el que ha pronunciado el H. Pleno de la Suprema Corte
"de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en
"revisión número 5981/90, promovido por Manufacturera de
"Reactores, S.A., declarando inconstitucional el artículo 76,
"fracción III, del Código Fiscal de la Federación, que
"facultaba a la autoridad fiscal a imponer multas por haber
"omitido el pago de contribuciones, del 150% sobre el monto de
"éstas. - - - De tal manera, que si en relación con la
"obligación principal, que es enterar contribuciones y sus
"accesorios, el H. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
"Nación ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 76,
"fracción III, del Código Fiscal de la Federación, que
"facultaba a la autoridad para imponer multas del 150% sobre el
"monto de la contribución omitida, con mayor razón se debe
"declarar la inconstitucionalidad del artículo 84, fracción VI,
"del Código Fiscal de la Federación, que prevé la imposición de
"una multa mucho mayor para el caso de una obligación formal
"como es la de que el comprobante reúna requisitos fiscales.
"Resulta mayor la sanción en este último caso, debido a que
"recae sobre el importe total de la operación y es a razón de
"cinco veces su monto. - - - Debido a ello, su señoría debe
"reconocer la inconstitucionalidad del artículo 84, fracción
"VI, del Código Fiscal de la Federación, ya que contraviene al
"artículo 22 constitucional y, asimismo, reconocer la
"ilegalidad del oficio señalado como acto reclamado número 102-
"A-11-III-57168 de fecha 30 de noviembre de 1993, concediendo a
"mi poderdante el amparo y protección de la justicia federal
"solicitados en contra de éstos y los demás actos y leyes
"reclamados a las autoridades responsables."

TERCERO.- El Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, a quien por razón de turno, correspondió conocer del asunto, admitió la demanda, la registró con el número 56/94 y, previos los trámites legales, dictó sentencia el veinte de abril de mil novecientos noventa y cuatro, con los siguientes puntos resolutivos:

"Primero.- se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Comerkim, S.A. de C.V. en contra de los actos reclamados al presidente de la República, secretario de Hacienda y Crédito Público y secretario de Gobernación, actos que quedaron precisados en los considerandos primero, segundo y tercero de esta resolución. - - - Segundo.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Comerkim, S.A. de C.V. en contra de los actos reclamados al Congreso de la Unión, presidente de la República, de la administradora Local de Auditoría Fiscal del Centro del Distrito Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y administrador Local de Auditoría Fiscal del Centro del Distrito Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y actos que se precisaron en el resultando primero, y en atención a lo expresado en el último considerando de la presente sentencia."

Las consideraciones en que se sustenta la sentencia impugnada, son las que a continuación se transcriben:

"Primero.- No son ciertos los actos reclamados al presidente de la República, consistentes en la publicación y ejecución de la Ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales y que reforma otras leyes federales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa, concretamente el artículo 84, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, por así manifestarlo dicha autoridad al rendir su informe justificado, sin prueba en contrario que desvirtúe dicha negativa, motivo por el cual sobre el



DE JUSTICIA
NACION
DE AMPARO

particular, procede sobreseer con fundamento en el artículo "74. fracción IV. de la Ley de Amparo. - - - Segundo.- Tampoco "son ciertos los actos reclamados al secretario de Hacienda y "Crédito Público consistentes en los actos, acuerdos u órdenes "tendientes a la ejecución de la Ley que establece, reforma, "adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales y que "reforma otras leyes federales, publicada en el Diario Oficial "de la Federación el veintiséis de diciembre de mil novecientos "noventa, concretamente del artículo 84, fracción VI, del "Código Fiscal de la Federación, por así manifestarlo dicha "autoridad en el informe justificado que le fue solicitado, sin "prueba en contrario, motivo por el cual sobre este particular "también procede sobreseer de conformidad con lo establecido "por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo. - - - En "relación a los actos reclamados negados por las responsables "en los considerandos que preceden, sirven de apoyo las tesis "de jurisprudencia números 53 y 1002, visibles en las páginas "90 y 1621, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice "al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, intituladas "respectivamente: ~~ACTO RECLAMADO. NEGACION DEL~~ e "INFORME "JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS "AUTORIDADES". - Tercero.- No es cierto el acto reclamado "al secretario de Gobernación, consistente en el refrendo de la "Ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas "disposiciones fiscales y que reforma otras leyes federales, "publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis "de diciembre de mil novecientos noventa, no obstante que dicha "autoridad lo reconozca, por así desprenderse de la publicación "de la ley reclamada, y porque además, las leyes no se "encuentran sujetas para su validez, al refrendo por parte del "secretario de Estado correspondiente, pues a ello sólo se "encuentran sujetos los reglamentos, decretos u órdenes del "presidente de la República de acuerdo con lo dispuesto por el

"artículo 92 de la Constitución General de la República, siendo
"aplicable la tesis plenaria visible en la página 1187 de la
"Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la
"Federación, 1917-1988, cuyo tenor literal es el siguiente:
""REFRENDO. ES INEXISTENTE SI SE RECLAMA COMO OTORGADO A LA LEY
""MISMA Y APARECE QUE LO FUE A SU DECRETO PROMULGATORIO.
""la lectura del Diario Oficial de la Federación en que se
""publicó el decreto relativo a la ley reclamada, se ~~vierte~~
""que en sí misma no tiene refrendo de parte de los ~~señores~~
""de Estado, sino que éste se otorgó a su decreto
""promulgatorio, debe concluirse que no es cierto el refrendo
""reclamado de la ley y, por ello, de conformidad con lo
""dispuesto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de
""Amparo, se debe sobreseer en el juicio de garantías por ese
""acto". - - - En tal virtud, sobre el particular procede
"sobreseer en el presente juicio de garantías, con fundamento
"en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo. - - -
"Cuarto.- Es cierto el acto, reclamado al Congreso de la Unión,
"consistente en la discusión, aprobación y expedición de la Ley
"que establece, reforma, adiciona y deroga diversas
"disposiciones fiscales y que reforma otras leyes federales,
"publicada en el Diario oficial de la Federación el veintiséis
"de diciembre de mil novecientos noventa, concretamente el
"artículo 84, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación,
"no obstante que dicha autoridad haya sido omisa en rendir su
"informe justificado y estar debidamente emplazada para ello,
"toda vez que su existencia está comprobada en términos de los
"artículo 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles
"aplicados supletoriamente conforme a lo dispuesto por el
"artículo 2° de la Ley de Amparo, con la publicación oficial
"respectiva. - - - Al caso, resulta aplicable la tesis
"sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
"Nación que aparece publicada en la página 983 de la Primera



DE JUSTICIA
ACION
DE ACUERDO

Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de
"1917 a 1988, cuyo rubro es: "LEYES NO SON OBJETO DE PRUEBA". -
"- - Quinto.- es cierto el acto reclamado al presidente de la
"República, consistente en la promulgación de la Ley que
"establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones
"fiscales y que reforma otras leyes federales, publicada en el
"Diario oficial de la Federación el veintiséis de diciembre de
"mil novecientos noventa, concretamente el artículo 84,
"fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, por así
"admitirlo al rendir su informe justificado y porque además su
"existencia se acredita en los términos de los artículos 86 y
"88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados
"supletoria (sic) en juicio de amparo conforme a lo dispuesto
"por el artículo 2° de la Ley de Amparo, con la publicación
"oficial mencionada. - - - Sexto.- Es cierto el acto reclamado
"a la administradora Local de Auditoría Fiscal del Centro del
"Distrito Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito
"Público, consistente en la emisión del oficio número 102-A-11-
"III-57168 de fecha treinta de noviembre de mil novecientos
"noventa y tres, por medio del cual se impone multa a la
"quejosa por la cantidad de \$778,892.75, por así manifestarlo
"la referida responsable en su informe justificado, y porque
"además así se acredita con la documental que obra glosada en
"autos a folios 19 a 21. - - - Séptimo.- En términos del
"artículo 149 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto
"reclamado al administrador Local de Recaudación del Centro del
"Distrito Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito
"Público, consistente en los actos tendientes a obtener el pago
"de la multa que se impuso a la quejosa por el administrador
"Local de Auditoría Fiscal del Centro del Distrito Federal de
"la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio del
"oficio número 102-A-11-III-57168 de fecha treinta de noviembre
"de mil novecientos noventa y tres, toda vez que fue omisa en

"rendir su informe justificado, no obstante estar debidamente
"emplazada para ello, como se acredita con la constancia de
"notificación que obra a fojas 91 de autos. - - - Octavo.- Sea
"que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la
"procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión
"orden público en el juicio de garantías de acuerdo con lo
"dispuesto por el último párrafo del artículo 73 de la Ley de
"Amparo, en relación con la tesis de jurisprudencia número 940
"visible en la página 1538 del Apéndice al Semanario Judicial
"de la Federación 1917-1988, bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA". -
"- - El procurador Fiscal de la Federación al rendir informe
"justificado en representación del presidente de la República y
"por el secretario de Hacienda y Crédito Público, hace valer
"como causa de improcedencia la contenida en la fracción XV del
"artículo 73 de la Ley de Amparo, por considerar que el acto
"reclamado no es un acto definitivo. - - - Resulta infundada la
"causa de improcedencia que hacen valer las referidas
"responsables, en razón de que en el presente caso la parte
"quejosa reclama la Ley que establece, reforma, adiciona y
"deroga diversas disposiciones fiscales y que reforma otras
"leyes federales, publicada en el Diario Oficial de la
"Federación el veintiséis de diciembre de mil novecientos
"noventa, a partir del primer acto de aplicación de la misma,
"por lo que, en todo caso es opcional para la quejosa hacer
"valer los recursos o medios de defensa ordinarios procedentes,
"o impugnar, desde luego, la ley a través del juicio de
"garantías, como lo señala el último párrafo de la fracción XII
"del artículo 73 de la Ley de Amparo. - - - Sirve de apoyo a lo
"anterior la tesis jurisprudencial número 134 visible a fojas
"239 de la Primera Parte del Apéndice al Semanario Judicial de
"la Federación, cuyo rubro es: "LEYES. RECURSOS QUE DEBEN
""AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA, CUANDO OPERA EL
""PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO". - - - Al



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
UNIDAD DE ACUERDO

rendir su informe justificado (foja 107 a 111 de autos), la "administradora Local de Auditoría Fiscal del Centro del Distrito Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. hace valer la causa de improcedencia contenida en la "fracción XVIII del artículo 73, en relación con el artículo "116, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, por considerar "que la autoridad responsable que llevó a cabo la notificación "de la resolución combatida no fue llamada a juicio. - - - La "causa de improcedencia que hace valer la autoridad de mérito, "resulta inoperante, habida cuenta que la responsable la "invoca señalando que toda vez que la quejosa no señaló como "autoridad responsable a la autoridad que llevó a cabo la "notificación de la resolución número 102-A-11-III-57168 de "fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y tres, "de la que se duele la quejosa, el juicio resulta improcedente "y consecuentemente debe sobreseerse con fundamento en la "fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin embargo "como se dijo, esta causal es inoperante, en virtud de que se "la lectura integral de la demanda de garantías, de manera "alguna se advierte que la quejosa señalara como acto reclamado "a la notificación de fecha treinta de noviembre de mil "novecientos noventa y tres, motivo por el cual la quejosa no "tenía porque llamarla a juicio. - - - El procurador Fiscal de "la Federación y la administradora Local de Auditoría Fiscal "del Centro del Distrito Federal, al rendir sus respectivos "informes justificados, hacen valer como causa de improcedencia "la contenida en la fracción XVIII del artículo 73, en relación "con el diverso 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por "considerar que la quejosa no vierte concepto de violación "alguno en contra del artículo 84, fracción VI, de la ley "combatida. - - - Resulta igualmente infundada la causa de "improcedencia que hacen valer las referidas autoridades "responsables, en razón de que, de la lectura integral de la

"demanda de garantías, concretamente de su capítulo de
 "conceptos de violación, este juzgador advierte
 "substancialmente que la quejosa esgrime manifestaciones a
 "manera de silogismo, tendientes a demostrar en su concepto
 "violación de garantías cometida en su contra la ley de en
 "esta vía se combate, concretamente el artículo 84, fracción
 "VI, del Código Fiscal de la Federación, motivo por el cual el
 "suscrito considera infundada dicha causal. - - - No existiendo
 "a juicio del suscrito, alguna otra causa de improcedencia que
 "debiera ser analizada de oficio, procede entrar al fondo de la
 "cuestión planteada. - - - Noveno.- Resulta fundado el único
 "concepto de violación que esgrime la parte quejosa, en el cual
 "substancialmente aduce que el artículo 84, fracción VI, del
 "Código Fiscal de la Federación es violatorio del artículo 22
 "Constitucional, toda vez que prevé la imposición de una multa
 "excesiva por la infracción relativa a expedir comprobantes sin
 "requisitos fiscales. - - - Continúa manifestando la quejosa
 "que el oficio número 102-A-11-III-57168 de fecha treinta de
 "noviembre de mil novecientos noventa y tres, por medio del
 "cual la administradora Local de Auditoría Fiscal del Centro
 "del Distrito Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito
 "Público, con fundamento en el artículo 84, fracción VI del
 "Código Fiscal de la Federación, impone multa a la quejosa por
 "N\$778, 692.75, por haber detectado dicha responsable, en uso
 "de sus facultades de comprobación, que la quejosa al haber
 "expedido las facturas números A 4829 a A 4833, A 4836, A 4837,
 "A 4840 a A 4842, A 4844, A 4846 a A 4858, B 0541 y B 0542, C
 "01062 a C 01072 y C 01074 a C 01087, no consigna el número y
 "fecha del documento aduanero, así como la aduana por la que se
 "realizó la importación, y que además en algunas de dichas
 "facturas no se consigna la clave del registro federal de
 "contribuyentes ni se conserva copia fotostática de la cédula
 "de la clave del registro federal de contribuyentes, es



JUSTICIA
CION
DE ACUERDO

[Firma manuscrita]

violatorio del artículo 22 Constitucional, toda vez que al "hacerlo, la responsable no tomó en consideración la gravedad "de la infracción, el monto del negocio, así como la capacidad "económica del multado, y que, en consecuencia, dicha multa "resulta excesiva. - - - Ahora bien, el artículo impugnado, a "la letra dice: - - - "Artículo 84.- A quien cometa las ""infracciones relacionadas con la obligación de llevar ""contabilidad a que se refiere el artículo 83 se impondrán ""las siguientes sanciones: - - - "...VI.- De cinco veces el ""importe total que debió consignarse en el comprobante de que ""se trate a la señalada en la fracción VII..." - - - En "efecto, de lo anterior se colige que el artículo 84 fracción "VI, del Código Fiscal de la Federación, al adoptar un sistema "sancionatorio a través del establecimiento de multas fijas, "transgrede la garantía contenida en el artículo 22 "constitucional, pues para imponer la multa no se toman en "consideración circunstancias especiales que permitan la "individualización de la sanción, como lo son: la gravedad del "ilícito, el monto del negocio y la capacidad económica del "multado. - - - En ese orden de ideas, al establecer el "legislador en el artículo 84, fracción VI, del Código Fiscal "de la Federación "VI.- De cinco veces el importe total que ""debió consignarse en el comprobante de que se trate a la ""señalada en la fracción VII...", incurre en una violación al "artículo 22 constitucional, en virtud de que, como se apuntó "antes al no permitir tomar en cuenta la circunstancias "especiales del infractor que permitan individualizar la "sanción, pues permite que las sanciones sean de igual monto "para dos personas que hayan incurrido en la hipótesis de la "fracción VI del citado artículo, aún cuando la capacidad "económica de ambas sea distinta, abre la posibilidad de que se "apliquen multas excesivas, como en el caso que no ocupa. - - - "En otras palabras, para que una multa no sea considerada

"excesiva, se requiere que la ley que la contenga le deje a la
"autoridad un margen mínimo y un máximo para sancionar a cada
"infractor de acuerdo a la capacidad económica de éste y a la
"cantidad porcentual del importe de la omisión atribuida. - - -
"Ahora bien, para una mejor comprensión del asunto, se ha
"necesario precisar el concepto de multa excesiva establecido
"por nuestros tribunales, toda vez que nuestra Constitución es
"omisa al respecto; en ese sentido, el Tercer Tribunal
"Colegiado en Materia Administrativa del Primer Tribunal
"sostenido en la tesis que aparece publicada en la página 115
"del Informe de Labores para el año 1988, y tercera parte, bajo
"el rubro: CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. INCONSTITUCIONALIDAD
"DE SU ARTICULO 76. FRACCION III", y en la parte conducente.
"que: - - - "Así, el concepto de multa excesiva se puede
"establecer, tomando en consideración los elementos que la
"integran, partiendo tanto de la acepción gramatical del
"término "excesivo", como de las interpretaciones realizadas
"por la doctrina y la jurisprudencia: a).- En primer lugar,
"una multa es excesiva cuando la sanción pecuniaria impuesta
"al infractor, para reprimir y prevenir la infracción
"tributaria, salga de los límites de lo ordinario o de lo
"razonable. - b).- Una multa es excesiva cuando la sanción
"pecuniaria está en desproporción con las posibilidades
"económicas del multado, en relación con las posibilidades
"económicas del multado, en relación a la gravedad del ilícito
"fiscal.- c).- El carácter excesivo de la multa está en
"función a las características individuales del multado,
"pudiendo ser excesivo para unos, moderada para muchos y leve
"para pocos.- d).- Para que una multa no sea contraria al
"texto constitucional, debe en el establecimiento del monto
"pecuniario, tener en cuenta las condiciones individuales del
"infractor en concordancia con el hecho que la motiva.- e).-
"Las multas excesivas pueden estar establecidas en ley, cuando



"la sanción pecuniaria sea fija o invariable, impidiendo a la
"autoridad administrativa individualizar la multa en cada caso
"concreto. lo que se traduce en que en la imposición de la
"multa no se tome en cuenta ni las condiciones económicas del
"infractor ni el ilícito fiscal..." - - - A mayor
"abundamiento, cabe precisar que el carácter excesivo de la
"multa fijada por el artículo 84, fracción VI, no atiende al
"porcentaje que en dicha fracción se consigna, sino que al
"establecerse un sistema rígido para la imposición de multas,
"sin tomar en cuenta la capacidad económica del infractor y la
"gravedad de la infracción es suficiente que la autoridad
"hacendaria descubra en uso de sus facultades de comprobación,
"la omisión en cubrir requisitos fiscales, para que cualquier
"persona sea sancionada en la misma forma. - - - Para concluir,
"cabe destacar que en el presente asunto, se impuso a la
"quejosa Comerkim, S.A. de C.V. con fundamento en el artículo
"84, fracción VI del Código Fiscal de la Federación, una multa
"por la cantidad de \$778,892.75, equivalente a cinco veces el
"importe que consignó o debió consignar en las facturas números
"A 4829 a A 4833, A 4836, A 4837, A 4840 a A 4842, A 4844, A
"4846 a A 4858, B 0541 y B 0542, C 01062 a C 01072 y C 01074 a
"C 01087, por haber incurrido en la hipótesis normativa
"prevista en el artículo 83, fracción VII, del Código Fiscal de
"la Federación, es decir, por haber expedido comprobantes
"fiscales sin que éstos cubrieran todos los requisitos exigidos
"por las leyes de la materia, sin haberse tomado en
"consideración la gravedad del ilícito, el monto del negocio ni
"las condiciones económicas del infractor en su conjunto. - - -
"En las relacionadas condiciones, al resultar fundado el
"concepto de violación analizado, procede conceder a la quejosa
"el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. - -
"- Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razones, el
"criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte

"de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en
"revisión número 5981/90, promovido por Manufacturera de
"Reactores, sociedad anónima, en sesión celebrada el día trece
"de mayo de 1992. - - - Al resultar inconstitucional el
"artículo 84, fracción VI del Código Fiscal de la Federación,
"en vía de consecuencia, el amparo otorgado debe hacerse
"extensivo a la resolución número 102-A-11-III-57168 de fecha
"treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro
"emitido por la administradora Local de Auditoria Fiscal del
"Centro del Distrito Federal y sus actos de ejecución
"atribuidos al administrador Local de Recaudación de dicha
"Administración."

CUARTO.- Inconforme con dicha resolución, el
procurador Fiscal de la Federación, en representación del
presidente de la República, en ausencia del secretario de
Hacienda y Crédito Público, interpuso recurso de revisión, que
fue admitido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en auto de nueve de junio de mil novecientos
noventa y cuatro.

El agente de Ministerio Público Federal de la
adscripción, en su pedimento respectivo, solicitó se confirme
la sentencia recurrida y se conceda el amparo.

En proveído de dos de agosto de mil novecientos
noventa y cuatro, el presidente de este alto Tribunal ordenó
turnar los autos para su estudio al ministro Diego Valadés
Ríos.

La autoridad recurrente, mediante escrito presentado
en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación con fecha cuatro de
octubre de mil novecientos noventa y cuatro solicitó se dicte
el fallo definitivo en este asunto.



FORMA
17

Por acuerdo de siete de febrero de mil novecientos noventa y cinco, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó turnar los autos para su estudio y resolución al ministro ponente Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VIII, inciso a) de la Constitución General de la República, 84, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo y 11, fracción V, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la federación el tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco, y que entró en vigor a partir del día cuatro del mismo mes y año, en virtud de que se interpuso en contra de una sentencia pronunciada por un Juez de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo en el que se reclamó la inconstitucionalidad del artículo 84, fracción VI del Código Fiscal de la Federación, y subsiste en el recurso este problema.

SEGUNDO.- Los agravios que formula la autoridad recurrente, son del tenor literal siguiente:

"Primero.- El juez del conocimiento afirma que el "artículo 84, fracción VI del Código Fiscal de la Federación "viola lo dispuesto en el artículo 22 Constitucional que "prohíbe la multa excesiva, toda vez que en su opinión, no se "toman en cuenta las circunstancias especiales del infractor. "Aseveración equivocada si se considera que sólo analizó el "contenido de la disposición mencionada sin relacionarla con la "aquella del propio ordenamiento que tipifica la infracción que

"sanciona y que por ello la contempla, y más aún, sin ubicarla
"en el contexto de los preceptos de los que forma parte, e
"inclusive de todos aquellos que regulan las infracciones e
"imponen los castigos que le corresponde. - - - En efecto,
"juzgador examina de manera aislada el artículo 84 que
"determina que las multas que se deben imponer a quien cometa
"las infracciones relacionada con la obligación de llevar la
"contabilidad a que se refiere el diverso 83 del propio Código
"Fiscal de la Federación, y de dichas multas sólo se estudia la
"que se impone al que cometa la infracción establecida en la
"fracción VII del último numeral mencionado. Sin embargo, por
"no analizar las disposiciones en su conjunto, no toma en
"consideración que es el propio legislador quien al crear el
"ordenamiento que nos ocupa, consigna el elemento objetivo
"consistente en la gravedad del daño y correlaciona los demás
"factores, para llegar así a un porcentaje de multa justo para
"quien incurre en cada supuesto infraccionario. - - - Esto es
"así ya que de un análisis conjunto de la fracción VI del
"artículo 84, con la fracción VII del artículo 83, ambos del
"Código Fiscal de la Federación, lleva a la conclusión de que
"se trata de una sanción a violaciones accesorias en materia
"tributaria, que son descubiertas en el ejercicio de las
"facultades de comprobación de la autoridad hacendaria, lo que
"justifica que la multa establecida no tenga nexo alguno con
"una omisión en el pago de una contribución. - - - Por otra
"parte, tal como se desprende del artículo 83 del Código Fiscal
"de la Federación, se puede afirmar que la conducta que
"sanciona en su fracción VII, resulta evidentemente grave pues
"se incurre en ella al no expedir los comprobantes de las
"actividades que realizan los particulares y que en virtud de
"no proporcionarlos, impide el que la Secretaría de Hacienda y
"Crédito Público pueda a través de sus mecanismos de
"fiscalización el verificar si dichas personas han cumplido sus



obligaciones fiscales declarando en forma correcta sus ingresos con lo que se ocasionaría un grave perjuicio al Erario Federal al no proporcionarles la información necesaria para el cumplimiento de su obligación constitucional de constatar el fiel cumplimiento por parte de los contribuyentes, con lo que se acredita que si se toma en consideración la gravedad de la infracción. - - Por lo que se refiere a la causa medular que el Juez consideró conveniente para conceder el amparo consistente en que no se toma en cuenta la capacidad económica del contribuyente para la aplicación de la multa impuesta al infractor es importante resaltar que precisamente dicho requisito quedó satisfecho desde el momento en el que se consideró el monto del ingreso referido al importe total que debió consignarse en el respectivo comprobante. - - En efecto, si el infractor no expidió el comprobante respectivo, mismo que forma parte del capital de dicha persona, podemos concluir válidamente que esto refleja la capacidad económica del infractor, debido a que tal cantidad repercute precisamente en la economía del gobernado de un modo positivo, ya que la está incrementando. - - En este orden de ideas resulta plenamente constitucional el que el legislador haya previsto como sanción lo establecido en el artículo que nos ocupa, pues en ella ya está inmerso el requisito de tomar en consideración la capacidad económica del sujeto infractor, por lo que al no haberlo entendido así el a quo, es evidente que irroga el agravio que se hace valer. - - Por otra parte, debe también señalarse que, resulta inatendible y carente de sustento jurídico el criterio sostenido por el juzgador en el sentido de que no se atiende el perjuicio que se pudiera ocasionar a la colectividad con la conducta realizada por el infractor, en principio, porque es la propia sociedad a través de su representante que es el Congreso de la Unión quien estableció el monto de la sanción

ORTE DE RESOLUCION
N.º 12
GENERAL

"que la permitirá resarcirse de los perjuicio que le fueron
"ocasionados y además porque si tomamos en cuenta que el
"Gobierno Federal está investido de un poder sancionador
"otorgado por la propia Constitución Política en cuanto
"refiere a la facultad de exigir a los particulares el
"cumplimiento de sus obligaciones fiscales y al no poder ser
"atendida cabalmente tal situación por los contribuyentes, la
"autoridad administrativa se vio obligada a hacer uso de la
"facultad sancionadora para obtener el debido acatamiento a la
"norma jurídica; en el caso de las obligaciones tributarias, el
"elemento sancionador se convierte en vital para que el Estado
"no se vea privado injustificadamente de los recursos que
"necesita para la oportuna atención de las necesidades
"colectivas del interés general, razonamientos que sirven de
"apoyo para demostrar la existencia del perjuicio que se
"ocasiona a la colectividad con dicha conducta. - - - Segundo.-
"Violación a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de
"Amparo por inexacta aplicación e interpretación de la tesis
"que hace valer el a quo cuyo rubro es: "CODIGO FISCAL DE LA
""FEDERACION. INCONSTITUCIONALIDAD DE SU ARTICULO 76, FRACCION
""III". - - - Se causa el agravio que se hace valer, toda vez
"que el a quo se apoya para conceder el amparo en una tesis que
"no es aplicable al caso concreto, pues la disposición legal a
"la que se refiere dicha tesis es de contenido distinto del que
"se plantea en la fracción VI del artículo 84 del Código Fiscal
"de la Federación. - - - Lo anterior es así toda vez que en el
"caso a estudio la multa no puede estar en proporción con el
"monto del impuesto omitido, pues como ya se ha hecho
"referencia en el agravio anterior, en el caso que nos ocupa si
"se toman en cuenta las condiciones individuales del infractor
"y además el monto de la sanción se relaciona directamente con
"los ingresos obtenidos por el propio contribuyente,
"contrariamente a lo que establece la fracción III del artículo



70



CORTE DE JUSTICIA
FEDERAL

Arce

76 del Código Tributario. - - - Por otra parte, tal y como se
"ha mencionado en el caso que nos ocupa, estamos en presencia
"de una multa determinable, por lo que no se actualizan los
"supuestos que se invocan en la tesis aplicada por el juzgador.
"- - - Ahora bien, el C. Juez al dictar la sentencia que se
"recurre debió analizar la disposición cuestionada en relación
"con el artículo 83 en el que se establece la infracción, así
"como con aquellas disposiciones que imponen multas. La
"fracción VI del artículo 84 no puede ser estudiada a la luz de
"un criterio que resolvió respecto de la constitucionalidad de
"otro artículo del Código Fiscal de la Federación, ya quien si
"bien impone una sanción y se trata de conceptos distintos,
"pues mientras la disposición cuya constitucionalidad se
"discute, determina la sanción para la infracción cuya omisión
"impide saber la cuantificación de un negocio, la tesis presume
"que la multa se impone a la comisión de una infracción
"relativa a una obligación legal en la que es posible
"cuantificar su monto."

TERCERO. - Son infundados los agravios transcritos.

En efecto, el artículo 84, fracción VI, del Código
Fiscal de la Federación, establece:

"Artículo 84. A quien cometa las infracciones
"relacionadas con la obligación de llevar contabilidad a que se
"refiere el artículo 83, se impondrán las siguientes sanciones.

"...VI. De cinco veces el importe total que debió
"consignarse en el comprobante de que se trate a la señalada en
"la fracción VII. En caso de reincidencia, la sanción
"consistirá en la clausura preventiva del establecimiento del
"contribuyente por un plazo de tres a quince días. Para
"determinar dicho plazo, las autoridades fiscales tomarán en
"consideración lo previsto por el artículo 75 de este Código."

Por su parte, el artículo 83, fracción VII, del mismo ordenamiento establece:

"Artículo 83. Son infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad, siempre que sean descubiertas en el ejercicio de las facultades de la comprobación, las siguientes:

"...VII.- No expedir comprobantes de sus actividades, cuando las disposiciones fiscales lo establezcan o expedirlas sin requisitos fiscales."

Ahora bien, contrariamente a lo que aduce la autoridad recurrente en sus agravios, el Juez de Distrito estuvo en lo correcto al estimar que la multa a que se refiere el artículo 84, fracción VI, transcrito, viola el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues tal como lo manifestó, efectivamente en dicho precepto se señala una cantidad fija de cinco veces el importe que debió consignarse en el comprobante de que se trate a la señalada en la fracción VII, sin dar oportunidad de que la autoridad competente individualice en cada caso concreto el monto de la multa tomando en cuenta la capacidad económica del infractor, la gravedad de la conducta a sancionar y la mayor o menor trascendencia del asunto en que se cometió la falta, ya que es precisamente esa falta de oportunidad individualizadora lo que conduce a considerar que una multa es contraria a lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución Federal.

Sirven de apoyo a lo antes expuesto, las tesis de la Segunda Sala, publicadas en las páginas 756 y 2187 de los tomos XLVIII y LXXXV, de la Quinta Epoca del Semanario Judicial de la Federación, que dicen:

"MULTA EXCESIVA.- En el texto constitucional respectivo, sólo quedó consignada la prohibición de imponer multas excesivas, pero sin darse la definición de ellas, ni establecer normas que bastaran para calificar las sanciones



pecuniarias, en los casos que se presentan en la práctica. Por otra parte, el concepto exacto del constituyente, no puede conocerse, debido a que en la sesión respectiva del Congreso en que se votó el artículo 22, no llegó a tratarse la cuestión ni el dictamen de la comisión que lo formuló, contiene ideas sobre el particular. Por tanto, para establecer un criterio sobre la fijación de las multas, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia adopta la teoría que consiste en dejar al criterio prudencial del juzgador, en cada caso particular, la calificación de si una multa es excesiva o no, debido a que este criterio es el más jurídico y justo, dado que no es posible establecer una norma general que atienda las condiciones económicas de cada infractor, que, en definitiva, es la única circunstancia que pueda tenerse en cuenta para valorar con equidad el carácter de la multa aplicada, sin que pueda admitirse la tesis de que el criterio para juzgar si una multa es excesiva o no, depende de la aplicación del máximo o mínimo que fije la ley, pues aun en el caso de que se aplique el mínimo, la multa podría ser excesiva para una persona, por el reducido valor de su patrimonio, y para otra no, por la cuantía de sus bienes. Por lo que, para imponerla, debe tenerse presente en cada caso, dos elementos fundamentales: que exista correspondencia entre la cuantía de la multa y la fortuna y condiciones económicas del infractor, y que la sanción pecuniaria esté en proporción con el valor del negocio en que se cometió la infracción que se castiga."

"MULTAS EXCESIVAS, QUE DEBE ENTENDERSE POR TALES.- La

"Suprema corte ha sentado la tesis de que: no existiendo una base legal que permita calificar cuándo debe estimarse como excesiva una multa, el juzgador necesita tener en cuenta los dos elementos que siguen: que exista correspondencia entre la cuantía de la multa y las condiciones económicas del infractor y que la sanción pecuniaria esté en proporción con el valor

"del negocio en que se cometió la infracción que se castiga: de acuerdo con la tesis transcrita, multa excesiva es aquella que no corresponde a las condiciones económicas del penado o que es notoriamente desproporcionada con el valor del negocio que se cometió."

No impide estimar lo anterior, el argumento de la autoridad recurrente, en el sentido de que el Juez de Distrito hizo un estudio aislado del artículo 84, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación, y no un estudio interrelacionado con el artículo 83, fracción VII, del mismo ordenamiento, pues aunque es cierto que la multa de que se trata guarda relación con la omisión de los contribuyentes de expedir comprobantes de sus actividades, precisamente porque el importe total que debió consignarse en el comprobante, constituye la base para la determinación del monto de la sanción, ello no basta para desvirtuar las consideraciones sustentadas en la sentencia recurrida donde se estimó que el artículo 84, fracción VI, del Código Fiscal de la Federación es inconstitucional porque establece un porcentaje único como multa, sin tener en cuenta la capacidad económica del infractor y la gravedad de la infracción.

Tampoco se desvirtúan esas consideraciones del Juez de Distrito con las demás argumentaciones que hace la recurrente, pues ni aun relacionando el artículo 84, fracción VI, citado, con el dispositivo que indica, se llega al conocimiento de que en la aplicación de la multa que establece dicho precepto, se toman en cuenta las condiciones económicas del infractor y la gravedad de la infracción, ya que si el mismo sanciona la comisión de las infracciones que originen la omisión del contribuyente de expedir comprobantes de sus actividades o expedirlos sin requisitos fiscales, cuando sean descubiertas por las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación, ello no lleva a estimar que se

73
12

toma en cuenta la gravedad de la infracción o la capacidad económica del contribuyente porque la autoridad estima que la infracción consignada en el artículo 83, fracción VII, es evidentemente grave.

En oposición a lo afirmado por la recurrente, el precepto legal de que se trata (artículo 84, fracción VI), en sí mismo evita que la autoridad hacendaria esté en aptitud de tomar en cuenta las características anotadas en los párrafos precedentes.

En efecto, el multicitado precepto legal sanciona, en la misma forma, con un importe de cinco veces el importe total que debió consignarse en el comprobante de que se trate a la señalada en la fracción VII y, en caso de reincidencia la sanción consistirá en la clausura preventiva del establecimiento del contribuyente por un plazo de tres a quince días.

Por otra parte, es verdad que en el numeral transcrito se sancionan las infracciones relacionadas con la obligación de llevar contabilidad, como es la de no expedir comprobantes de las actividades del contribuyentes; sin embargo, ello en modo alguno justifica que se viole lo dispuesto por el artículo 22 de nuestra Constitución, al imponer al infractor una multa excesiva, como sucede en la especie; no impide estimar lo anterior, el argumento de la autoridad recurrente en el sentido de que el requisito de la capacidad económica quedó satisfecho desde el momento en el que se consideró el monto del ingreso referido al importe total que debió consignarse en el respectivo comprobante, toda vez que, lo que determina que una multa sea contraria al artículo 22 Constitucional no es el monto que arroje eventualmente en cada caso concreto, ni la gravedad de la conducta sancionada, sino la imposibilidad de que la multa se adecue a través del análisis que realice la autoridad sancionadora de la capacidad

económica y de la importancia del negocio, cada vez que vaya a imponerse.

Por otro lado, las tesis que citó el Juez de Distrito en su sentencia son perfectamente aplicables, pues independientemente de que una de ellas se refiere al artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, en ambas se precisa cuándo debe considerarse que una multa fiscal es excesiva, que es el tema que se abordó en el presente asunto.

Por último, en lo que respecta al agravio en el que se sostuvo que la conducta que sanciona el artículo 83, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación es una conducta grave pues se incurre en ella al no expedir los comprobantes y esto impide que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pueda a través de sus mecanismos de fiscalización el verificar que las personas han cumplido sus obligaciones fiscales declarando en forma correcta sus ingresos con lo que se ocasionaría un grave perjuicio al Erario Federal al no proporcionarle la información necesaria para el cumplimiento de su obligación constitucional de constatar el fiel cumplimiento por parte de los contribuyentes en el pago de sus contribuciones, en lo que se acredita que sí se toma en cuenta la gravedad de la infracción; el mismo no es apto para demostrar la constitucionalidad de los preceptos reclamados, sino que atañe a cuestiones relacionadas con los actos concretos de aplicación, mismos que resultan inconstitucionales también por estar apoyados en el precepto impugnado, que como ya se vió, son contrarias al artículo 22 de la Carta Magna.

Similar criterio sostuvo el Tribunal Pleno al resolver entre otros, los siguientes asuntos:

"Amparo directo en revisión 5820/90, promovido por "Materiales C.R., Sociedad Anónima de Capital Variable, de la "ponencia de la señora Ministra Clementina Gil de Lester, "resuelto en sesión de dos de junio de mil novecientos noventa



y dos por mayoría de doce votos de los señores Ministros Lanz "Cárdenas, Alba Leyva, Llanos Duarte, Cal y Mayor Gutiérrez, "Gil de Lester, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno "Flores, García Vázquez, Azuela Güitrón, Chapital Gutiérrez y "Presidente Schmill Ordóñez, los señores Ministros de Silva "Nava, Magaña Cárdenas, Castañón León, López Contreras, "Fernández Doblado, Adato Green, Rodríguez Roldán y Díaz Romero "votaron en contra. La señora ministra Gil de Lester manifestó "que las consideraciones del proyecto original constituirán su "voto particular, el que se anexa al final de este fallo. Los "señores ministros Lanz Cárdenas y Alba Leyva manifestaron su "inconformidad con algunas de las consideraciones del proyecto."

"Amparo Directo en Revisión 263/92, promovido por "Esther Díaz de la Vega, en sesión de veintiuno de enero de mil "novecientos noventa y tres, de la ponencia del señor Ministro "Sergio Hugo Chapital Gutiérrez; aprobado por mayoría de trece "votos de los señores Ministros Lanz Cárdenas, Montes García, "Llanos Duarte, Alba Leyva, Cal y Mayor Gutiérrez, Gil de "Lester, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, "García Vázquez, Azuela Güitrón, Chapital Gutiérrez y "Presidente Schmill Ordóñez; los señores Ministros Magaña "Cárdenas, Castañón León, López Cárdenas, Fernández Doblado, "Adato Green y Díaz Romero votaron en contra. La señora "Ministra Gil de Lester manifestó su inconformidad con algunas "de las consideraciones de la resolución. No asistió el señor "Ministro de Silva Nava, previo aviso a la presidencia."

"Amparo en revisión 925/91, promovido por vehículos de "Tezuitlán, Sociedad Anónima, de la ponencia del señor Ministro "Samuel Alba Leyva, resuelto en sesión de ocho de junio de mil "novecientos noventa y tres, aprobado por mayoría de doce votos "de los señores Ministros Lanz Cárdenas, Montes García, Llanos "Duarte, Alba Leyva, Cal y Mayor Gutiérrez, Gil de Lester,

"González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Azuela Güitrón y Presidente Schmill Ordóñez; los señores Ministros Magaña Cárdenas, López Contreras, Fernández Doblado, Adato Green, Díaz Romero y Chapital Gutiérrez, votaron en contra. El señor Ministro Alba Leyva manifestó su inconformidad con algunas de las consideraciones del proyecto; los señores ministros Lanz Cárdenas, Montes García, Cal y Mayor Gutiérrez y Gil de Lester, manifestaron que votaron en razón de la votación anterior. No asistieron los señores Ministros de Silva Nava y Castañón León, previo aviso a la presidencia."

IMPRESA
DE LA
SECRETARIA DE

"Amparo Directo en Revisión 273/92, promovido por Almacenes García de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, en sesión de trece de abril de mil novecientos noventa y cuatro, de la ponencia del señor Ministro Lanz Cárdenas, por mayoría de trece votos de los señores Ministros Sempé Minvielle, Llanos Duarte, Alba Leyva, Cal y Mayor Gutiérrez, Gil de Lester, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Azuela Güitrón, Chapital Gutiérrez, García Domínguez y Presidente Schmill Ordóñez; los señores Ministros de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Castañón León, López Contreras, Fernández Doblado, Adato Green y Díaz Romero votaron en contra. Los señores Ministro Sempé Minvielle y Gil de Lester manifestaron su inconformidad con alguna de las consideraciones del proyecto. El señor Ministro García Domínguez integró el pleno en términos de lo dispuesto en el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en virtud del acuerdo plenario de cinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro. No asistió el señor Ministro Lanz Cárdenas, por estar disfrutando de vacaciones. Dada la ausencia del señor Ministro ponente Lanz Cárdenas, el señor Ministro Presidente Schmill Ordóñez hizo suyo el proyecto."



"Amparo en Revisión 742/93, promovido por Extractos y "Maltas, Sociedad Anónima, del señor Ministro José Antonio "Llanos Duarte, resuelto en sesión de veinte de septiembre de "mil novecientos noventa y cuatro, aprobado por mayoría de once "votos de los señores Ministros Sempé Minvielle, Llanos Duarte, "Alba Leyva, Gil de Lester, González Martínez, Villagordoa "Lozano, Moreno Flores, García Vázquez, Azuela Güitrón, "Chapital Gutiérrez y Presidente Schmill Ordóñez; los señores "Ministros de Silva Nava, Magaña Cárdenas, Valades Ríos, "Fernández Doblado, Adato Gren y Díaz Romero votaron en contra; "los señores Ministros Sempé Menvielle y Gil de Lester votaron "con salvedades."

Los anteriores precedentes, no obstante referirse a la constitucionalidad del artículo 76, fracción III (las cuatro primeramente citadas) y al artículo 85, fracción III (el último de los mencionados) ambos del Código Fiscal de la Federación, resultan aplicables al caso a estudio al abordarse en ellos el problema de lo que debe entenderse por multa excesiva.

Igualmente este Tribunal Pleno, al resolver por unanimidad de votos el veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y cinco, el amparo directo en revisión 2071/93, promovido por Grupo de Consultores Metropolitanos, S.A. de C.V., expresó al respecto lo siguiente:

"La sentencia impugnada considera que el artículo 76, "fracción III, del Código Fiscal de la Federación, es "violatoria del artículo 22 constitucional, el cual prohíbe la "multa excesiva, para lo cual se requiere que se tomen en "cuenta las condiciones individuales del infractor en "concordancia con el hecho que la motiva.

"Con frecuencia se ha alegado que todo el artículo 22 "constitucional prohíbe la aplicación de sanciones "exclusivamente penales, como son las de mutilación e infamia, "la marca, los azotes, los palos y el tormento, y en general

"cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. En su
"párrafo tercero, como culminación, prohíbe la pena de muerte,
"con la posibilidad de ser aceptada en la legislación ordinaria
"para casos sumamente excepcionales que enumera
"exhaustivamente. Esta última es una sanción exclusivamente
"penal.

"Pero dicha disposición al mencionar sanciones
"claramente penales incluye igualmente a la multa excesiva y a
"la confiscación, de bienes, las cuales es factible decretar
"tanto en tratándose de infracciones penales, como las que
"ocurren en otras ramas de la normatividad legal, dejando la
"duda de si la prohibición de la multa excesiva -que se examina
"en este fallo- debe referirse únicamente a aquella que se
"impone por la comisión de ilícitos penales, o es igualmente
"referible a otras faltas o infracciones como podrían ser las
"de carácter fiscal.

"Esta sentencia considera que utilizando el método de
"mayoría de razón, debe entenderse que si la Constitución
"Política de nuestro país prohíbe ciertas sanciones a imponer
"dentro del derecho represivo, que es el más drástico y radical
"dentro de las conductas prohibidas normativamente, por
"extensión y bajo mayoría de razón debe entenderse que si la
"multa excesiva está prohibida en tratándose de infracciones
"penales, con mayor razón lógica debe considerársele así en el
"campo de otras conductas que no se ajustan a la norma legal,
"como podrían ser los ilícitos administrativos y
"específicamente los fiscales. Por ello debe concluirse que
"las multas deben prohibirse, bajo mandato constitucional,
"cuando sean excesivas, prodúzcanse dentro del campo penal, o
"en cualquier otro. La multa no es una sanción que sólo pueda
"concebirse en lo penal, es común también a otras ramas del
"derecho, y así debe decretarse para superar criterios de





76
75

exclusividad penal, que no están de acuerdo con la naturaleza de las sanciones. 77

"Pero el artículo 22 constitucional que prohíbe "cierto tipo de multas no clarifica cuáles son las excesivas a "las que específicamente se refiere. Por ello debe intentarse "su deslinde.

"Si bien el artículo 22 constitucional prohíbe la "multa excesiva, lo cual habría de conformarse en los casos "pertinentes, otorgando la protección constitucional a aquellas "personas a las cuales una autoridad imponiera una multa que "presente dichos excesos, el propio artículo 22 no nos "proporciona un concepto de excesividad. Sino que para ello es "necesario relacionar armónicamente esta disposición con los "conceptos de proporcionalidad y equidad que establece la "fracción IV, del artículo 31 constitucional.

"Es cierto que la multa, como sanción, no tiene "equivalencia real con la contribución para los gastos públicos "a los cuales se refiere la fracción IV del artículo 31, pero "además de que el último párrafo del artículo 2° del Código "Fiscal de la Federación equipara su naturaleza jurídica con "las contribuciones, no cabe duda que la Federación, el "Distrito Federal, el Estado o los Municipios obtienen, de "contribuciones y multas, fondos que deberán aplicar a los "gastos públicos, y es entendible que en ambas situaciones "aparezcan reglas protectoras de las personas que deben cubrir "tanto unas como otras.

"Más todavía, los conceptos de proporcionalidad y "equidad establecidos por la Constitución en su artículo 31, "fracción IV, por extensión lógica, deben regir, en armonía con "el citado artículo 22, no solamente las multas fiscales sino "también las de carácter administrativo, porque en todas ellas "se hace imprescindible la necesidad de individualizar la "sanción.

DE JUSTICIA
ACION
DE ACUERDO

"En un primer concepto, por lo tanto, debe entenderse
"que es criterio deducido del propio sistema constitucional,
"que para que una multa no resulte atentatoria para los
"derechos y garantías de las personas -o sea: excesiva-, se
"requiere que las multas se ajusten a un criterio protector de
"proporcionalidad y de equidad, tal y como ocurre en las
"contribuciones.



SUPREMA CORTE
DE LA NACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

"Efectivamente, para que una multa no resulte
"excesiva y por tanto, violatoria del artículo 22
"constitucional, resulta necesario facultar a la autoridad
"sancionadora con el objeto de que se encuentre en condiciones
"de correlacionar dos elementos, a saber:

"a) Que exista correspondencia entre la cuantía de la
"multa y las condiciones económicas del infractor, y

"b) Que la sanción pecuniaria tome en cuenta la
"gravedad de la falta.

"Por consiguiente, no basta que el ordenamiento
"respectivo establezca sólo alguno de los elementos
"mencionados, ya que de ser así no se daría oportunidad al
"infractor para demostrar si fue o no su intención causar el
"daño al incurrir en la conducta prohibida, su mayor o menor
"capacidad económica, o bien, su grado de responsabilidad en la
"omisión, constitutiva de la infracción; situación que de no
"estimarse, podría ocasionar la imposición de una multa
"excesiva. De ahí que, si bien importa la gravedad de la
"lesión, en razón del perjuicio que ocasionó al Estado en
"materia tributaria, también importa el grado de
"responsabilidad o de intención en la conducta del
"contribuyente al producir la conducta que dio origen a la
"sanción, como la situación económica en que se encuentra el
"infractor.



"Resulta necesario fijar, no sólo para este caso concreto sino para los futuros, un concepto de excesividad para que se califique a una multa.

"De la acepción gramatical del vocablo excesivo, así como de las interpretaciones dadas por la doctrina, y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para definir el concepto de multa excesiva, contenido en el artículo 22 constitucional, se pueden obtener los siguientes elementos:

"A).- Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito fiscal.

"B).- Una multa es excesiva cuando se propasa, va más adelante de lo lícito y lo razonable.

"C).- Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para muchos.

"D).- Para que una multa no sea contraria al texto constitucional, debe determinarse su monto o cuantía, tomarse en cuenta la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor y la reincidencia de éste en la comisión del hecho que la motiva.

"E).- La garantía de prohibición de multas excesivas, contenidas en el artículo 22 constitucional, se presenta en la práctica casi siempre en relación con la determinación concreta de la sanción administrativa, pero esta prohibición comprende también al legislador.

"F).- La multa excesiva puede estar establecida en la ley que emana del Poder Legislativo cuando se señalan sanciones fijas que no dan bases para la autoridad administrativa a individualizar esa sanción, permitiendo a ésta un actuar arbitrario, aunque esté dentro de los límites establecidos en la propia ley. 77

"El sistema impositivo de multas por omisión en el pago de contribuciones establecidas en el Código Fiscal de la

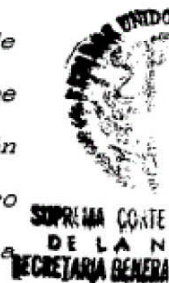
"Federación, viola por parte del Poder Legislativo la
"prohibición constitucional de imponer multas excesivas,
"contenidas en el artículo 22 de la Carta Magna.

"El artículo 76 del Código establece un sistema de
"multas fijas, esto es, no contiene mínimos y máximos, conforme
"a los cuales la autoridad administrativa que impone la sanción
"pueda sancionar, ni existe ningún otro precepto legal dentro
"del Código que obligue a la autoridad fiscal a razonar la
"imposición de multas, ni éstas deben ser impuestas, tomando en
"cuenta cuestiones como la gravedad de la infracción, la
"capacidad económica del infractor, el perjuicio causado a la
"colectividad, etc. Lo anterior significa que el legislador no
"otorgó a la autoridad administrativa la facultad discrecional
"de cuantificar las multas.

"De la lectura del artículo 76, tal como se encuentra
"redactado, vemos que una misma infracción era sancionada con
"multas de los porcentajes del 50%, 100% y 150%, sobre las
"contribuciones omitidas.

"La cuantía de la multa, no está referida a ninguna
"circunstancia especial o individualizada del infractor, sino a
"la rapidez con la que éste decide pagar la multa. Lo que se
"traduce en que un infractor de la misma naturaleza, puede ser
"sancionado con multas diversas en su cuantía, dependiendo ese
"monto de la fecha en que el mismo decida pagar. La
"posibilidad de ser sancionado con una multa menor, depende no
"de la gravedad de la infracción o de las condiciones
"económicas del sujeto, sino de su menor o mayor temor a tener
"que afrontar una multa que no puede pagar.

"El legislador, a través del artículo 76 del Código,
"estableció para sancionar la infracción de que se trate,
"multas invariables e inflexibles que se aplican igual para
"todos, de lo que resulta que el infractor con excelentes
"condiciones económicas no sufre sanción alguna; el de medianos





77

recursos económicos, una multa ligera; y aquél sin recursos
"económicos, una multa muy grave, produciéndose así una
"desigualdad absoluta e injusta entre personas que cometieron
"el mismo ilícito fiscal e, incluso entre personas en que la
"gravedad de la infracción es distinta.

"Así, no existiendo en el Código Fiscal de la
"Federación ningún precepto legal conforme al cual la autoridad
"administrativa que impone la sanción pueda adecuar su monto de
"acuerdo a las circunstancias especiales del caso, deteniéndose
"en el punto que crea conveniente, inspirándose el ejercicio de
"su facultad en esas circunstancias, sino por el contrario, al
"establecer multas inflexibles e invariables para todos, está
"violando la prohibición constitucional establecida en el
"artículo 22, referente a multas excesivas.

"Las multas que contiene el precepto comentado, no
"son excesivas porque se estima que lo son los porcentajes del
"50% o del 100%, o del 150% que antes se establecía. No,
"aisladamente, si se comparan esos porcentajes con las
"cantidades que en el anterior Código Fiscal de la Federación
"se establecían como cuantía de las multas, que eran hasta de
"tres tantos de la prestación fiscal omitida, tal parecería que
"el sistema adoptado por el Código Fiscal de la Federación
"vigente es más benigno. Sin embargo, con independencia de los
"porcentajes establecidos, el hecho de que en ese ordenamiento
"legal, conforme al cual se sancionan todas las infracciones
"por omisiones de contribuciones federales cometidas en el
"país, a excepción hecha de la omisión de contribuciones al
"comercio exterior, contenga un sistema rígido e inflexible
"para la imposición de multas, en el que no se obligue a la
"autoridad administrativa en el ejercicio de su facultad
"sancionadora, a individualizar el monto de la multa que
"imponga, dentro de máximos y mínimos, tomando en cuenta
"circunstancias como la gravedad de la infracción o la

DE JUSTICIA
ACCIÓN
H. DE ACUERDO

"capacidad económica del infractor, hace que el Código Fiscal
"de la Federación sea violatorio de la referida garantía
"individual contenida en el artículo 22 constitucional, lo que
"se traduce en que el Poder Legislativo creó multas excesivas
"a través de ese ordenamiento legal.

"En otras palabras, el Código Fiscal vigente,
"contiene multas excesivas, no por el porcentaje que se
"establece, sino porque crea un sistema rígido para la
"imposición de sanciones en el que cualquier persona es
"sancionada en la misma forma, bastando para ello el que omita
"el pago de una contribución y ésta sea descubierta a través de
"las facultades de comprobación de la administración pública.

Ⓚ "La definición gramatical del término excesivo,
"conlleva la idea de algo que puede ser comparado entre sí, y
"solamente se puede ir más adelante de lo debido, lo lícito o
"razonable, cuando existe algo que es debido, lícito o
"razonable.

"Al crearse un sistema de multas fijas, no existe
"forma, desde el punto de vista legal, de saber cuándo una
"multa es excesiva, o sea, cuándo va más allá de lo razonable,
"ni mucho menos cuándo es arbitraria o desproporcionada,
"¿razonable conforme a qué?, ¿arbitraria o desproporcionada,
"conforme a qué?.

"Es en ese sentido, que se considera que el sistema
"que contiene el Código Fiscal de la Federación es violatorio
"del artículo 22 constitucional, pues instala un sistema rígido
"para la imposición de sanciones, sin que se establezca para la
"autoridad administrativa el deber de individualizar el monto
"de la sanción al caso concreto.

"De la lectura del artículo 76, tal como se
"encontraba antes de la última reforma, se tiene que realmente
"la única multa que la autoridad aplicaba, era la del 150% de
"las contribuciones omitidas, pues en los casos del 50% y del





100%, dicha autoridad no estaba obligada a emitir resolución alguna fijando la multa, y ni en este extremo estaba obligada a razonar esa cuantía.

"Es por ello que las multas del 50% o del 100%, no pueden considerarse como mínimas, en relación a la multa del 150%, porque su aplicación no está en función de circunstancias conforme a las cuales se individualice la multa por la autoridad administrativa, sino que su cuantía depende de la decisión particular de pagar lo más rápido posible.

"Debe concluirse que la introducción en el Código Fiscal del sistema de las multas fijas, pareciera haber sido hecha simplemente para que las autoridades administrativas no tuvieran el problema de razonar el monto de la multa impuesta, lo cual es notoriamente injustificado..

"Sólo un punto queda por aclarar en esta conclusión respecto a que el artículo 22 constitucional, si bien contiene preferentemente sanciones penales, en materia de multas pueden referirse, como se ha establecido en esta sentencia, no sólo a las penales, sino a las que impongan otras normas no penales, como las administrativas en general y las fiscales en lo especial.

"En efecto, interpretado el artículo 22 constitucional como una disposición que encara actos que pueden poner en predicamento la vida, la libertad personal, y otros derechos fundamentales de las personas, la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales otorga manejos procesales consecuentes a este punto de vista. Por ello, y para ejemplificar, el artículo 22 de la Ley de Amparo, en su fracción II, indica que el término de quince días para interponer la demanda de amparo no rige en tratándose, entre otros, de cualesquiera de los actos prohibidos en el artículo 22 constitucional, que como se ha venido analizando incluye la multa excesiva. Así también el

"artículo 123 que otorga el beneficio de la suspensión de
"oficio, según su fracción I, cuando se trate de actos de los
"prohibidos por tal disposición constitucional.

"Si se concluyere que tratándose de la imposición de
"multas excesivas, los agraviados podrían interponer la demanda
"de amparo contra su aplicación en cualquier tiempo,
"obteniéndose además el derecho de lograr una suspensión de
"oficio, de plano y sin substanciación, ello sería verdad si la
"multa excesiva se derivara de una sentencia que impusiera una
"sanción penal de carácter pecuniario, como lo es la multa.
"Pero no lo es en tratándose de multas excesivas impuestas en
"sede no penal, como las que se analizan en este fallo por
"extensión, simplemente bajo un razonamiento lógico de mayoría
"de razón, y tanto sólo para fijar su naturaleza, su contenido
"y su conceptualización. Es entendible que tal análisis
"comparativo no puede llevar al extremo de otorgar tratamientos
"de substanciación especiales, sólo entendibles bajo la
"protección de los valores que protege la normatividad penal."

SE
DE LA
SECRETARIA GEN

En este orden de ideas, ante lo infundado de los
agravios de la autoridad recurrente, debe confirmarse la
sentencia combatida.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.- En la materia de la revisión, se confirma
la sentencia recurrida.

SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a
Comerkim, sociedad anónima de capital variable, contra las
autoridades y por los actos que quedaron precisados en el
resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución
devuélvanse los autos del juicio de amparo al juzgado de su



origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.



ITE DE JUSTICIA
NACIONAL
ECONOMICA

Puesto a votación el proyecto modificado, lo aprobó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de nueve votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Azuela Guitrón, Castro y Castro, Díaz Romero, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Román Palacios, Sánchez Cordero, y Presidente Aguinaco Alemán, con los siguientes puntos resolutivos: confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo a la quejosa. En virtud de la licencia concedida al Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, hizo suyo el proyecto el señor Ministro Mariano Azuela Guitrón y manifestó que las consideraciones del proyecto serán las mismas que las de la resolución emitida por el Tribunal Pleno en el amparo directo en revisión 2071/93, con ponencia del señor ministro Castro y Castro, en sesión del veinticuatro de abril del año en curso. No asistió el señor Ministro Juan N. Silva Meza, en virtud de la licencia que el Tribunal Pleno le concedió en términos de su acuerdo de veinte de abril último.

Firman los señores Ministros Presidente y Ponente, con el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

EL PRESIDENTE:

LIC. JOSE VICENTE AGUINACO ALEMAN.

EL PONENTE:

LIC. MARIANO AZUELA GUITRON.

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS:

LIC. JOSE JAVIER AGUILAR DOMINGUEZ.

RECIBIDO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS
PARA NOTIFICACION EL 13 JUL. 1995

En 14 JUL. 1995 y Por medio de lista, se
notificó la resolución anterior a las partes y al Ministerio Público
Federal. Conste.